AMÉRICA LATINA: LA CRISIS Y EL FUTURO

Por Felipe González* Ex Presidente del Gobierno español

EL MARCO GLOBAL

Todo el mundo, sin excepciones, asume ya el carácter global y sistémico de esta crisis financiera y económica. La impresionante burbuja especulativa del sistema financiero estalló y sus consecuencias afectan a países centrales y periféricos o desarrollados y en desarrollo, cualquiera que sea su nivel. Las ficciones de una bonanza sin límites y sin fundamentos reales se han deshecho, y el golpe sobre la economía productiva está siendo tan intenso que se volverá en círculo vicioso contra el propio sistema financiero.

Es cierto que, en esta ocasión, la crisis empezó por los mercados de Estados Unidos. Las reacciones, primero de Europa y más tarde de América Latina, de Rusia o de Asia, eran las mismas y sucesivas. "Es cosa de Estados Unidos", se decía. O, más tarde, "de Estados Unidos y de la Unión Europea", hasta que todos se contaminaron y empezaron a reaccionar. La ceguera temporal se acabó. La epidemia se transformó en pandemia y el mundo entró en una fase recesiva que, salvo en los lejanos tiempos de 1929 y con sus lógicas diferencias, nunca se había vivido en un clima como el actual y con unos efectos semejantes.

^{*} Embajador Plenipotenciario y Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario de la independencia de la Repúblicas Iberoamericanas

Cuando escribo esto, como participación introductoria en un libro colectivo sobre el futuro de América Latina y el Caribe, dudo si plantear la reflexión a modo de pregunta: ¿qué hacer frente a la crisis?, porque la pregunta pudiera quedar fuera de actualidad por el carácter coyuntural que atribuimos siempre a las crisis. Pero, pensándolo bien, es más fácil que pierdan actualidad las respuestas que la pregunta misma, porque la crisis, por su profundidad y complejidad, está para quedarse durante un tiempo que ahora es imposible evaluar.

Toda crisis es una ocasión ineludible para que nos planteemos, en los estrechos márgenes disponibles, las medidas anticíclicas que disminuyan su efecto sobre nuestras realidades, pero también es una oportunidad para enfrentar las reformas estructurales pendientes que puedan facilitar un desarrollo sostenido y sostenible a medio y largo plazo.

Si admitimos como evidencia que la crisis tiene un carácter global y sistémico, deberíamos hacer un esfuerzo para aclarar los propios conceptos que utilicemos y no errar el camino en lo fundamental.

Por ejemplo, rechazar la globalización como fenómeno replegándose en las fronteras de los Estados nacionales sería un primer error a evitar porque sólo nos conduciría a retrasar la superación de la crisis. La revolución tecnológica que ha roto las barreras del tiempo y el espacio en la comunicación entre los seres humanos no es un fenómeno reversible. Abre espacios de oportunidad inusitados, aunque comporte riesgos como los actuales por el desequilibrio entre la gobernanza local y la dimensión global de los desafíos.

El sistema financiero ha funcionado como un gran casino financiero global sin reglas de previsibilidad y control, entregado a la famosa mano invisible del mercado como elemento de supuesta autorregulación.

Además, y aunque la crisis sea sistémica, hay que asumir que no hay alternativas al sistema como en los viejos tiempos de la política de bloques ideológicos, no hay contraposición entre economía de mercado como modelo y estatalización de la economía al viejo estilo comunista. Tampoco son alternativas creíbles las utopías regresivas en circulación que están llevando al fracaso a los que las intentan. Por tanto, hay que hacer las reformas necesarias en el propio sistema. Por emplear un lenguaje distinto: habría que reformar el modelo, no el sistema, introduciendo elementos regulatorios claros y no excesivos, instrumentos de gobernanza globales y nacionales coherentes con el sentido de las reformas. Pocas normas, claras y que se cumplan, como

aconsejaba Don Quijote a Sancho Panza cuando se aprestaba a gobernar la Ínsula Barataria.

Durante años, con el precalentamiento de los ochenta del pasado siglo y la aceleración del fracaso del comunismo, dominaron las teorías neoconservadoras del "Estado mínimo" y del "todo mercado". La economía de mercado se convirtió en sociedad de mercado y la política fue expulsada de su papel, como un estorbo innecesario. Ahora, producida la hecatombe, la "mano invisible" reclama a la política, exige al Estado que intervenga para salvar el mercado, no sólo al financiero, sino a la totalidad del sistema.

Los que creemos en la política con mayúsculas y en su función no podemos quejarnos, pero hay que reconocer que tanto tiempo de exclusión nos ha cogido desentrenados y hacer las cosas bien es un reto difícil en medio de este caos. Tenemos que entender que la política, salvo por omisión, no ha desencadenado esta crisis, aunque ahora tenga la ineludible obligación de enfrentarla.

Tal vez se pudiera argumentar que los gobiernos han reaccionado tarde ante la avalancha, pero, como no hay otro punto de comparación más que la crisis del 29 del pasado siglo, nos consuela pensar que las reacciones han sido más tempranas que nunca. Y se han producido masivamente, aunque no siempre gusten las recetas, se discuta la operatividad de los paquetes, o se critiquen los inevitables cambios de criterio a medida que se descubren nuevos problemas.

Pero cuando hablamos de la crisis como oportunidad para plantearse reformas de fondo, en las escalas locales y globales, quiero decir que América Latina y el Caribe tienen pendientes esas reformas que afectan a las instituciones representativas de la democracia para darles mayor calidad, en términos de previsibilidad, transparencia y eficiencia; reformas, también, para abordar un modelo de crecimiento con capacidad para redistribuir el ingreso y reducir la desigualdad; reformas, en fin, para desarrollar las infraestructuras físicas y mejorar el capital humano. América Latina y el Caribe deben, asimismo, plantearse acciones que faciliten la integración, más en términos prácticos que ideológicos, para aprovechar todas las sinergias que tiene la región. Por eso se puede afirmar que sin crisis, incluso en medio del quinquenio de bonanza pasado, estas reformas eran necesarias para avanzar hacia un futuro mejor, sostenible y exitoso en la inserción de la región en la nueva realidad global del siglo XXI.

En una primera fase, desde el país origen de la crisis financiera se actuó contra el estallido de las hipotecas basura, por sus características especiales. Después se reprochó a la Administración Bush que dejara caer a Lehman Brothers. Sin embargo, para un gobierno neoconservador, y aceptando la lógica del sistema desde el neoliberalismo reacio a toda intervención en los mercados, ése era el comportamiento que cabía esperar. La reacción de los mercados fue no obstante tan dura y fulminante que forzó un intervencionismo sin precedentes en el sistema financiero. A partir de ahí, se han añadido intervenciones sobre sectores ligados al financiero o a la economía productiva, como en el caso del sector del automóvil y otros.

A continuación, Gran Bretaña y el resto de los gobiernos de la Unión Europea entraron a saco en los mercados financieros, con fórmulas variadas pero con el mismo objetivo de salvar a las instituciones de la quiebra o de la falta de liquidez, aun sin conocer, hasta la fecha, la dimensión del agujero y, por tanto, la magnitud de las intervenciones necesarias.

En esos momentos del otoño de 2008, en América Latina todavía se sostenía que la crisis era cosa de los países centrales. Hasta que, como a los demás países emergentes o en vías de desarrollo, les llegó el turno de aceptar la pandemia. Aun así, los tiempos de reacción de los poderes públicos han sido comparativamente rápidos. En la crisis de 1929, hubo que esperar a 1932 para que el nuevo presidente de Estados Unidos iniciara un plan de respuesta de carácter keynesiano.

Los temas de los siete capítulos en los que se enmarcan las aportaciones de este libro, más la calidad de los autores, nos permiten hacer un repaso sobre las reformas necesarias en la región para enfrentar la crisis, ir más allá de la misma y encarar el horizonte de futuro sobre bases más operativas.

Así, el lector va a encontrar aportaciones sobre la crisis como oportunidad y como riesgo; sobre la necesidad de encontrar un modelo de crecimiento generador de empleo y capaz de redistribuir ingreso; sobre la educación, la formación y la salud como variables estratégicas clave en el esfuerzo de modernización e igualación de oportunidades; sobre la energía y el cambio climático; sobre el desarrollo de las infraestructuras para eliminar cuellos de botella para el desarrollo; sobre el efecto de los flujos migratorios en las sociedades de la región; sobre los desafíos de la seguridad física y jurídica ante las amenazas más peligrosas; sobre la calidad de la democracia y las ineludibles reformas institucionales para conseguirla, y sobre las acciones de integración regional que permitan aprovechar las sinergias de ese espacio con tan alto potencial de desarrollo.

Los nombres que firman los trabajos incluidos en esta publicación permiten asegurar lo mejor de la combinación a que da lugar una gran experiencia política y altas dosis de capacidad técnica e intelectual.

ANTECEDENTES

América Latina y el Caribe vivieron en los años ochenta del pasado siglo la crisis de la deuda —o lo que se ha venido en llamar "la Década Perdida"—, en el marco de acontecimientos mundiales de enorme envergadura.

De esos acontecimientos podemos destacar la desaparición del comunismo como modelo sistémico alternativo y la liquidación de la política de bloques. La llegada de Gorbachov y la caída del Muro de Berlín son los hitos más relevantes de ese proceso. Pero también se produjo el impacto de una revolución tecnológica sin precedentes, que ha generado un cambio civilizatorio con efectos tan evidentes hoy como la globalización del sistema financiero. Era el final de Bretton Woods y el resurgir económico y productivo de Asia.

En América Latina se produjo la caída sucesiva de los sistemas dictatoriales, arrastrados por ese contexto global, en medio de la crisis de la deuda y los fenómenos de la hiperinflación. A caballo entre los ochenta y los noventa, tuvo lugar el esfuerzo de estabilización y las reformas liberalizadoras de la economía, marcadas sobre todo por las privatizaciones. El proceso, positivo en su conjunto aunque con episodios dramáticos en algunos sectores de actividad, fue de reformas económicas y financieras sin que se produjeran cambios institucionales que prepararan a los Estados para la nueva etapa que se abría.

De ahí, entrados ya en el siglo XXI, pasamos al lustro de bonanza más exitosa en cuatro décadas. Algunos de los factores internos que explican esa bonanza vienen de las reformas anteriores que facilitan el aprovechamiento de los factores externos e impulsan el crecimiento económico y la disminución de la pobreza.

El ciclo quinquenal es inexplicable sin esos factores externos que lo impulsan. El espectacular crecimiento de los precios de las materias primas, incluidas las alimentarias; el incremento de los flujos de inversión; el impacto de las remesas de emigrantes; el acceso al crédito en mejores condiciones y otros factores cayeron sobre cuentas públicas sanas y precios controlados.

Aunque hubiera reformas institucionales y estructurales de fondo pendientes, como las que hemos citado, estos cinco años se han vivido como de euforia. En ese ambiente era imposible imaginar que los actores políticos se ocuparan de esas reformas porque el viento de la bonanza nubla la vista y trata de ser aprovechado como éxito propio y no transitorio.

Y LLEGÓ LA CRISIS

Y en medio de ese cuadro de optimismo general, se ha desencadenado la crisis financiera provocando un dramático cambio de ciclo mundial. América Latina, tras los primeros meses en que se negaba el contagio que esta vez provenía de los países centrales, ha empezado a sentir los efectos con creciente dureza y desigual respuesta.

A pesar de las fortalezas relativas de los países de la región, hemos visto una evolución de los precios al alza, un descenso importante de las remesas, una caída considerable de las exportaciones y de los precios de las materias primas, una subida de las tasas de interés y una fuerte desaceleración del crecimiento, aun sin llegar, todavía, a la recesión que conocemos en las economías de los países centrales.

Naturalmente, estos factores empiezan a afectar a la inversión y al empleo, vuelven a plantear el descenso de los niveles de vida bajo los límites de la pobreza y agitan los escenarios sociales en una etapa que estará marcada por sucesivos procesos electorales.

¿QUÉ HACER FRENTE A LA CRISIS?

La reflexión, base de esta publicación, tiene inevitablemente dos dimensiones esenciales: el margen que pueda existir en cada país para las medidas anticíclicas que atenúen los efectos más duros de la situación creada, y cómo relacionar esta reacción anticíclica con las principales reformas que se necesitan para encarar el futuro con éxito.

Como el margen de maniobra de la mayor parte de los países emergentes —éste es el caso de América Latina y el Caribe— es pequeño en las políticas monetarias, habría que aprovechar las políticas de gasto para impulsar las infraestructuras con la máxima rapidez y eficacia, añadiendo políticas intensivas en empleo como las referidas a vivienda de bajo coste o reparaciones de escuelas, centros de salud, caminos rurales y otras.

En realidad, el objetivo más importante es defender el máximo posible de empleo, teniendo en cuenta que el producto bruto va a caer sensiblemente. En esta coyuntura, habrá que mirar con más atención la evolución de la masa salarial y el empleo que la evolución del PIB. Cuesta un gran esfuerzo aceptar este razonamiento, habituados como estamos a relacionar mecánicamente crecimiento del PIB y empleo.

Como en el terreno de las infraestructuras los déficit son enormes, así como las necesidades de viviendas a precios asequibles o las mejoras en los sistemas de educación primaria, secundaria y salud, el esfuerzo conectará con la coyuntura y con parte de los objetivos prioritarios de medio y largo plazo que los lectores verán en las aportaciones a este libro.

Cada país debería tener en cuenta el grado de contaminación producido en sus sistemas financieros y productivos por la crisis de los derivados, y vigilar el flujo de crédito a las pequeñas y medianas empresas para que la necrosis del sector empresarial no se agrave. En la región, el 85% del empleo depende de las pequeñas y medianas empresas.

LOS DESAFÍOS DE FUTURO

La crisis, como ya se ha dicho, es también una oportunidad para enfrentar reformas en profundidad que despejen el horizonte de la región para las décadas siguientes.

En las múltiples conversaciones que he mantenido con buena parte de los autores de este libro, me han puesto de manifiesto reiteradamente un conjunto de prioridades que señalan, a la vez, objetivos comunes a todos y cambios estructurales e instrumentales para alcanzarlos. Sin profundizar en ellos —tarea que asumen esos autores en sus aportaciones— señalaré algunos de los más significativos.

1. Modelo de crecimiento, generador de empleo y redistribuidor del ingreso En el debate latinoamericano se contraponen dos corrientes básicas para enfrentar el desafío del crecimiento: por una parte, los que afirman que hay que generar las condiciones para crecer y que la propia dinámica del crecimiento producirá, a la larga, un efecto de derrame que mejorará las condiciones de vida de los más desfavorecidos, cerrando la brecha de la desigualdad; y, por otra, los que ponen énfasis en el crecimiento combinado con la equidad. En ambos casos se pretende una política que promueva la inversión y el crecimiento, aunque las recetas sean diferentes, como es propio de los sistemas pluralistas.

A mi parecer, partiendo de la preocupación que todos dicen compartir por la desigualdad lacerante y por la magnitud de la pobreza, los términos del debate tienden a la confusión porque, cuando se habla de crecimiento económico, se emplean argumentos técnicos, en tanto que, cuando se habla de la equidad, se hacen juicios éticos o morales. En realidad, lo que habría que definir es un modelo de crecimiento sostenible, con generación de empleo y redistribución del ingreso, frente a otro que pretende que hay que crecer y después, como efecto del crecimiento, se producirá esa redistribución de manera natural.

Para evitar la discusión moral en la lucha contra la desigualdad hay que insistir en la eficiencia de los modelos que se contraponen. Crecer primero y, a la larga, se redistribuye por derrame, o crecer con redistribución a lo largo del proceso. Más allá de la superioridad ética de un modelo que ofrezca crecimiento y redistribución, importa destacar que es más eficiente desde el punto de vista económico para todas las partes y, por tanto, para el conjunto de la sociedad.

En mi experiencia como gobernante y como observador de los procesos de desarrollo, cada vez que se impone el discurso de que hay que crecer primero y que más tarde vendrá la distribución del excedente, siempre se topa con el problema de las crisis o, si prefieren, de los ciclos. Cuando es un ciclo de bonanza, hay que esperar para redistribuir, acompañados de la vieja teoría de la acumulación de capital; cuando es un ciclo de desaceleración económica, no se puede pensar en redistribuir. Así hemos vivido dos décadas.

Como todos los gobiernos, sin distinción, priorizan el crecimiento y tratan de generar las condiciones para que haya inversión, empleo y sostenibilidad, si se apuesta por el modelo de crecer y redistribuir, directa e indi-

rectamente, hay que desarrollar las condiciones que propicien este modelo priorizado, que en la situación emergente de América Latina y el Caribe debe combinar un esfuerzo público-privado a lo largo del tiempo.

Por esto hay que prestar atención al empleo, a la mejora del capital físico y al aumento del capital humano, como factores que eliminen cuellos de botella y nos coloquen en la modernidad.

2. Desarrollo de las infraestructuras

Del cuarteto clásico energía, comunicaciones, telecomunicaciones y agua, sólo se conoce un avance considerable en el sector de las telecomunicaciones, que, con escasas excepciones, coloca a la región en buena posición relativa. En el resto, y con diferencias lógicas entre países, el capital físico es escaso y opera como un obstáculo permanente para un desarrollo sostenible.

Las carencias de infraestructuras de comunicaciones son muy generales en carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, hidrovías, etc. Aún son más significativas en sus dimensiones supranacionales. Naturalmente, esa situación frena las oportunidades de comercio, de inversión productiva o de flujos turísticos.

Otro tanto vemos con el uso del agua. Desde la necesaria potabilización, con efectos sobre la salud y la calidad de los servicios, hasta el potencial de uso hidroeléctrico, de transporte o de desarrollo agroalimentario, queda mucho por hacer y los recursos naturales son inmensos.

En materia energética, la región en su conjunto tiene sobrados recursos en petróleo y gas, con inversiones todavía escasas en exploración, transformación y transporte. Pero teniendo en cuenta la evolución internacional y el cambio climático, se necesita desarrollar todo el potencial de las energías menos contaminantes, de las que América Latina posee más posibilidades que ninguna otra zona del planeta.

Merece la pena analizar el capítulo de la energía, con todas sus implicaciones, porque América Latina puede y debe ser suficiente en energía no contaminante y exportadora en el conjunto energético. Este escenario de aprovechamiento de su potencial facilitaría el desarrollo regional y le permitiría ganar relevancia internacional con el excedente.

Sin estas variables resueltas, el desarrollo de la región y sus sinergias de integración se verán lastradas. De nuevo en este campo, que exige un gran esfuerzo inversor y sostenido en el medio y largo plazo, la combinación de

capital público y privado es imprescindible, ofreciendo proyectos viables de medio y largo plazo para la explotación de los recursos.

Por su impacto en el bienestar, por su capacidad de redistribuir renta y generar empleo masivo, hay que prestar atención a la promoción de la vivienda, de la que hay demanda insatisfecha muy abundante en todos los países.

3. Educación, formación, aprendizaje, salud

Si observamos el fenómeno del sudeste asiático —por ejemplo, Corea del Sur— en los últimos treinta años, llegaremos a la conclusión de que la variable fundamental para su espectacular desarrollo ha estado en la educación, en la mejora sustancial de sus sistemas de formación de capital humano, con rendimientos crecientes a lo largo del periodo.

Para América Latina y el Caribe, el desafío es de enorme trascendencia desde la educación primaria hasta la superior. Sin un cambio sustancial, que aproveche el bono demográfico existente, resultará imposible que la región se incorpore a la sociedad del conocimiento, como la variable estratégica más relevante para el desarrollo.

Las cifras de abandono en los primeros años del ciclo escolar y los porcentajes de fracaso suponen un drenaje insoportable para encarar el futuro con éxito. La paradoja de la sociedad actual es que el coste de la alfabetización digital, imprescindible en esta nueva era, es relativamente escaso en comparación con los costes tradicionales de extensión del sistema educativo.

Hay carencias significativas en la enseñanza secundaria, de la que se derivarán los flujos hacia la formación técnica media y hacia la educación superior. En todos los estudios se ponen de manifiesto las carencias en la formación científica básica. Pocas matemáticas o física y serias insuficiencias en el aprendizaje de la lengua.

También hay coincidencia en la necesidad de reforma de la universidad, hasta hoy escasamente orientada a la formación en titulaciones vinculadas a los desafíos de la sociedad tecnológica y del conocimiento.

Además, en todo el sistema educativo hay que crear una nueva conciencia del uso del aprendizaje, con un entrenamiento permanente de los jóvenes para que sepan lo que tienen que hacer con el conocimiento adquirido. Para superar la situación de las actuales fábricas de titulados que acceden a la sociedad demandando un empleo vinculado a su titulación de manera pasiva y reivindicativa, hay que dotar a los egresados de una clara conciencia de ofer-

ta, capaz de comprender el valor que pueden añadir a los demás con sus conocimientos y dispuestos a tomar iniciativas con riesgo. Es un problema cultural que compartimos en nuestras sociedades. La titulación es insuficiente si no se sabe qué se puede hacer con ella.

Junto a la educación, que iguala oportunidades por el talento y no por la condición social y que, además, es un factor de redistribución indirecta del ingreso de primer orden, hay que atender a la salud, como el siguiente factor de formación de capital humano necesario.

En América Latina mueren 1.000 niños al día por lo que en el argot internacional se denomina "enfermedades evitables" y que no es otra cosa que carencia en los sistemas básicos de asistencia sanitaria y de alimentación en los primeros momentos de la vida: falta de agua potable, alimentación deficiente, tardanza en responder a simples diarreas infantiles...

Por eso urge mejorar el sistema sanitario en el conjunto de la pirámide poblacional, desde la atención prenatal, pasando por la infantil, hasta la prevención de las enfermedades ligadas al desarrollo. En esta mejora es imprescindible analizar prospectivamente la evolución demográfica a treinta años y el impacto de las viejas y las nuevas enfermedades.

Aunque parezca innecesario, debemos insistir en que, ante la magnitud de la tarea en el campo de la mejora del capital humano, se necesita una cooperación pública, privada y social para vencer los obstáculos.

4. Mejorar el funcionamiento del Estado y de las administraciones públicas Al comienzo de esta reflexión introductoria me he referido a las reformas económicas liberalizadoras y a los esfuerzos macroeconómicos de la región en los años noventa del siglo pasado, así como a las insuficientes reformas de acompañamiento en el funcionamiento de las instituciones representativas y de las administraciones públicas.

A mi entender, sin estas reformas en las instituciones que añadan seguridad física y jurídica, previsibilidad en el proceso de toma de decisiones y mayor transparencia, la confianza de los ciudadanos no mejorará, las inversiones y el desarrollo serán más difíciles, sobre todo en el medio y largo plazo.

Para empezar, conviene recordar que el Estado-nación aparece en la sociedad contemporánea como necesidad para garantizar el ejercicio de las libertades en un clima de seguridad. La seguridad es un concepto omnicomprensivo: seguridad física frente a las amenazas de la delincuencia de todo

orden, seguridad en las relaciones entre los ciudadanos desde el punto de vista jurídico, o entre ellos y las administraciones públicas. Seguridad, en suma, de cumplimiento de una legalidad aplicada sin arbitrariedad y con eficiencia.

Si el ciudadano en su condición de consumidor, productor, inversor o usuario de los bienes públicos y privados no se siente seguro, protegido por un sistema judicial y policial eficiente y por una Administración previsible y transparente, su desconfianza aumenta, su temor también y, con ellos, su desapego por el sistema representativo. A esto llamo, en general, mejora de la calidad de la democracia, incluido el respeto y la defensa de los derechos humanos.

Hay que reconocer que el problema es universal. El desarrollo de grandes urbes, con concentraciones de pobreza y marginalidad, ha sido un caldo de cultivo para el aumento de la violencia que, en muchos casos, está poniendo a prueba la eficacia del Estado garante del ejercicio de las libertades más allá de los procesos electorales.

Además, la experiencia muestra que la previsibilidad en el proceso de toma de decisiones de las administraciones públicas es una condición inexcusable para el desarrollo sostenido a medio y largo plazo. Infinidad de trámites, desconocimiento de la fronda burocrática y desconfianza en el cumplimiento de las reglas lastran la confianza de los actores en todos los niveles.

Ambos factores —de seguridad física en el desenvolvimiento de la vida ordinaria de los ciudadanos y de seguridad jurídica en sus relaciones con los demás y con las administraciones— son piezas determinantes para el éxito ante el futuro que tratamos de mejorar.

En el debate de los últimos treinta años sobre el "Estado mínimo" neoliberal frente al "Estado grasiento" lleno de clientelismo, la evolución hacia el primero ha triunfado, contradictoriamente, porque ahora se reclama más Estado ante la crisis. Sin embargo, las reformas nos deberían llevar a un "Estado eficiente", que sepa aprovechar las nuevas tecnologías, sin acrecentar clientelarmente su tamaño. Sin grasa que lo lastre y sin la anemia que le impida actuar.

Seguramente hay que plantear cambios en algunos sistemas electorales para mejorar la gobernanza y dar estabilidad democrática a los gobiernos aumentando el carácter incluyente de la representación, pero esto nos lleva a la reflexión sobre la situación de los partidos políticos, generalmente en crisis en todos los rincones del mundo, con tendencia a la fragmentación y con excesos en los cambios de bando de sus miembros. Esta volatilidad de las lealtades a las ideas y a las organizaciones aumenta la desconfianza de los ciudadanos.

En fin, las reformas del Estado, incluyendo la de la Administración de Justicia, la labor de los parlamentos y la eficiencia y transparencia de los poderes ejecutivos se han convertido en una necesidad ineludible para el buen funcionamiento de la democracia y para la credibilidad de los ciudadanos.

La situación es muy diversa en América Latina y el Caribe, pero en casi todos los países hay reclamos de cambios. Las nuevas tecnologías de la información, bien aplicadas al funcionamiento de las administraciones públicas, pueden contribuir a esos cambios en la seguridad, en la transparencia, en la previsibilidad y en la eficiencia, con reducción de costes.

5. Acciones de integración regional

Permanentemente oímos hablar de la necesaria integración regional al tiempo que comprobamos las dificultades de los procesos de integración subregional existentes, lo mismo que la escasa relación intracomercial de América Latina y el Caribe, la falta de infraestructuras de todo tipo que conecten al conjunto del territorio y el escaso conocimiento de los actores políticos, económicos y sociales de la realidad de los demás países.

Se están produciendo encuentros del Grupo de los 20, en los que estarán presentes tres grandes países de la región. Si se coordinara la posición entre ellos y, al tiempo, se coordinara con los demás, seguramente se estaría incidiendo de manera más eficiente en la configuración de un nuevo orden económico y financiero mundial y se reforzaría el sentimiento de comunidad de América Latina.

Por otra parte, si contemplamos la realidad de la Unión Europea comprobaremos que su integración se ha debido al enorme incremento de sus relaciones intracomerciales —las dos terceras partes de media—, a una integración física real a través de las infraestructuras, a unas reglas de juego comunes que facilitan los intercambios etcétera.

Por eso, más que grandes construcciones ideológicas debemos propiciar acciones que faciliten la integración regional con acciones prácticas como las que se sugieren: posición común en el Grupo de los 20, carreteras y oleoductos internacionales, incremento del comercio con reglas comunes acordadas incluso respetando ciertas asimetrías, etcétera.

CONCLUSIÓN

El propósito general de este esfuerzo es definir estrategias para la inserción de América Latina y el Caribe en la nueva realidad global, superando la crisis y aprovechándola para introducir reformas que faciliten políticas incluyentes, con economías eficientes y socialmente justas.

Además, para alcanzar los objetivos tenemos que movilizar todos los recursos humanos y de capital disponibles, tanto públicos como privados y sociales.

La región sufrirá la crisis, como el resto del mundo, pero saldrá de ella fortalecida si enfrenta con decisión los desafíos que tiene por delante.